



pensabilidades (políticas y económicas). Si no se tiene conciencia de cuáles son esos sectores y sus obligaciones actuales, posiblemente sea necesario reescribir un nuevo *Ensayo sobre la ceguera*.

Los migrantes no son delincuente⁵

Editorial

Revista digital *Gazeta*

Como es de todos conocido, el COVID-19 es un virus importado, es decir, ha llegado al país en el cuerpo de personas que estuvieron en ambientes donde el virus ya circulaba. El Gobierno de Guatemala consiguió, relativamente, detener la importación desde Europa, aunque del primer caso, lamentablemente fallecido, el gobierno no tenía información de su contagio, a pesar de que se le había declarado en cuarentena. Al no tomarse las medidas sanitarias pertinentes, el virus se esparció en Chimaltenango.

Pero ese éxito parcial no ha sido similar con los migrantes deportados por Estados Unidos, eufemísticamente llamados retornados involuntarios, por razones que tienen por detrás las prácticas clasistas y racistas del Estado guatemalteco y la élite económica. Año con año, el número de guatemaltecos devueltos al país ha ido en aumento, solo el año pasado fueron deportados 52 mil 503 guatemaltecos por Estados Unidos y 46 mil 669 por México, superando en 7 % a los que llegaron en esas condiciones en 2018. Pero esto en nada ha preocupado a quienes financian sus lujos y ganancias con las remesas, pues día con día son miles de guatemaltecos los que tratan de llegar a Estados Unidos y ocupar los espacios laborales dejados por quienes han sido deportados.

5. Publicado el 26 de abril de 2020. Tomado de <https://gazeta.gt/editorial-121/>



El año pasado, Guatemala fue el segundo país de América Latina con el mayor volumen de dólares recibidos por ese concepto y, en los últimos años, las remesas han superado en porcentaje a las importaciones respecto al PIB. Esto significa que la economía y el valor del quetzal respecto al dólar estadounidense dependen del volumen de las remesas. Sin ellas, las importaciones de materias primas y bienes de consumo resultarían mucho más caros. Sin embargo, como el azadón, gobierno y élite económica solo han usufructuado los beneficios de las remesas, sin que esa estabilidad económica se convierta en beneficio para las familias de los migrantes, mucho menos en posible mejora económica para hacerles atractivo el retorno.

Sabiendo que el flujo de deportados sería alto, el gobierno no estableció criterios sanitarios mínimamente humanitarios para controlar su salud y posible contagio. La sumisión y dependencia política e ideológica respecto al gobierno conservador estadounidense hace que, si ante las cámaras se hace mucha alharaca, en la práctica se acepta sin chistar lo dicho y hecho por el dueño de esta finca. Si los estadounidenses decían que la pandemia era una histeria promovida por las izquierdas internacionales y que no pasaba de una gripe, era evidente que allá no se hicieran mayores controles a quienes enviarían de regreso a Centro América. Pero la tacañería del gobierno y la élite que lo controla no hicieron la más mínima inversión para que, desde que se cerraron los aeropuertos, se permitiera a los deportados hacer su aislamiento preventivo en condiciones decentes.

De allí que, ante tal irresponsabilidad, resultó que el ya famoso caso 36 de los contagios, llegado en uno de los vuelos de deportados el 26 de marzo, solo fuera detectado cuando ya había llegado a su comunidad y repartido, involuntariamente, el virus entre sus familiares y vecinos. Pero el presidente, dada su tendencia a ser el centro de la verdad y a la vez servil al régimen estadounidense, negó el hecho. Mientras el Ministerio de Salud llegó a decir que 75 % de los que llegaron en ese vuelo estaban contagiados, Giammattei se aferró a su negativa. Y la situación fue así el resto del mes de abril. El 13 de abril todos los medios de comunicación internacionales dijeron que 44 guatemaltecos retornados forzosamente estaban

contagiados, la Cancillería llegó a decir que solo eran 30, pero el presidente, de nuevo, no ofreció esa información, aceptando apenas que de los guatemaltecos evaluados, ya en el país, por agentes extranjeros, 12 eran portadores del virus.

La situación ha ido en ascenso, pues los estadounidenses y mexicanos no dejan de deportar, y el gobierno ha sido incapaz de prever condiciones mínimas para que estos sacrificados guatemaltecos puedan aislarse sin tener que sufrir más vejámenes. De tenerlos tendidos en el aeropuerto, se ha pasado a apuñuscarlos en el complejo deportivo Ramiro de León Carpio y a trasladar a los contagiados al hospital de campaña del Parque de la Industria, sin mayores condiciones sanitarias y humanitarias en ambos casos. Para la tarde del sábado 25, según datos de la PDH, había 196 pacientes, de los cuales 71 eran leves, curiosamente todos ellos deportados por Estados Unidos en los últimos días, y 125 moderados.

No hay, hasta ahora, información permanente y confiable sobre cuántos retornados forzados se encuentran realizando su cuarentena en el complejo deportivo Ramiro de León Carpio, mucho menos de las condiciones en las que la están realizando. El único dato ofrecido por el presidente Giammattei, quien supone saberlo todo y ser el único capaz de informar, fue que para 19 de abril habían sido trasladadas más de 230 personas.

Por otro lado, según informaciones verificadas en el propio hospital, lo sucedido el jueves 23 no fue un intento masivo de fuga, como errónea y con mala intención dijo el presidente. Los pacientes se molestaron porque uno de ellos fue golpeado por un policía. Es también falso que los deportados sean delincuentes. En realidad, son escasos los guatemaltecos deportados que, juzgados, hayan sido condenados por algún delito, la falta cometida por la inmensa mayoría y que les hace sujetos de deportación es haber entrado al país del norte sin permiso.

El gobierno debe, cuanto antes, revisar a fondo los protocolos para recepción, aislamiento y tratamiento médico de los deportados. Ellos son ciudadanos libres, como cualquier otro guatemalteco,

aunque no vivan en la zona 14 de la ciudad capital. Es fundamental que realicen su aislamiento en condiciones adecuadas, alejados totalmente de sus familiares, pero en condiciones en que se les respeten todos sus derechos y se les proporcionen las mínimas condiciones para soportar el aislamiento y, en su caso, la enfermedad involuntariamente contraída. Al no ser reos, deben ser tratados como huéspedes en los centros de aislamiento y como un paciente más en el centro hospitalario.

El presidente, sus ministros y todos los funcionarios responsables de la atención a los retornados deben tratarlos con respeto y no convertirlos en los responsables de la dispersión del virus, que es consecuencia directa de la manera poco profesional con la que se ha tratado este asunto y de la discriminación racial que en Estados Unidos se hace de ellos.

Enfermos y ciudadanos en cuarentena recién llegados deben contar con asistencia legal y psicológica. Deben tener la posibilidad de comunicación permanente con sus familiares y la vigilancia debe ser sutil y moderada.

Los migrantes son la fuerza laboral más importante del país, y mientras el modelo económico no cambie, los guatemaltecos seguirán huyendo del país, pues aún está lejano el día en que el Gobierno de Guatemala y sus élites sean capaces de decirles que les gustaría que «aquellos que vinieron del extranjero desde el estallido de la epidemia permanezcan en su país, pues, en comparación con tiempos difíciles, este país es un refugio seguro. Que si en el extranjero muy rápido pueden perder su trabajo, aquí no tendrán esa angustia», tal y como lo están diciendo gobernantes de otros países a sus grandes contingentes de migrantes retornados.